

8ra. Asamblea Legislativa  
Núm. 8  
3ra. Sesión Ordinaria  
(Aprobada en 5 de febrero de 1979)

(P. de la C. 526)

L E Y

Para enmendar la Sección 3 de la Ley núm. 2 de 17 de octubre de 1961 sobre Reclamación Sumaria de Salarios desviando a la Secretaría del Tribunal la responsabilidad de citar a la parte querellada.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El Código de Enjuiciamiento Civil recoge entre sus disposiciones un procedimiento simple y adecuado para la pronta solución de controversias que tienen su origen en reclamaciones salariales por parte de empleados contra sus patronos. Sin embargo, existen algunas limitaciones innecesarias que podrían eliminarse, dando así más flexibilidad y rapidez a este tipo de asunto. Entre estas limitaciones se destaca el hecho de que una vez radicada la petición, el juez tiene que convocar a la parte querellada a que conteste la querrela radicada. Ayuda grandemente a las labores judiciales que los Secretarios puedan expedir la correspondiente notificación sin necesidad de ocupar a los jueces con este trámite de carácter rutinario. La Administración de la Justicia en Puerto Rico saldrá beneficiada en más de una forma con este cambio, siendo la principal ventaja el descongestionamiento de los calendarios judiciales ya que los jueces tendrán más tiempo para dedicarse a tareas de carácter adjudicativo estrictamente.

*Decrétase por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico:*

Artículo 1.—Se enmienda la Sección 3 de la Ley núm. 2 de 17 de octubre de 1961 para que lea como sigue:

Sección 3.—Orden del Tribunal para que el querellado radique contestación; notificación; contestación, aplicación de las Reglas de Procedimiento Civil.

El Secretario del Tribunal notificará a la parte querellada con copia de la querrela, apercibiéndole que deberá radicar su contestación por escrito, con constancia de haber servido copia de la misma al abogado de la parte querellante o a ésta si hubiere comparecido por derecho propio, dentro de diez (10) días después de la notificación, si ésta se hiciere en el distrito judicial en que se promueve la acción, y dentro de quince (15) días en los demás casos, y apercibiéndole, además, que si así

no lo hiciere, se dictará sentencia en su contra, concediendo el remedio solicitado, sin más citarle ni oírle. Solamente a moción de la parte querellada, la cual deberá notificarse al abogado de la parte querellante, o a ésta si compareciere por derecho propio, en que se expongan bajo juramento los motivos para que ello tuviere la parte querellada, podrá el Juez, si de la faz de la moción encontrara causa justificada, prorrogar el término para contestar. En ningún otro caso tendrá jurisdicción el Tribunal para conceder esa prórroga.

El alguacil o una persona particular diligenciará la notificación del Secretario del Tribunal al querellado. Si no se encontrare al querellado, se diligenciará la orden en la persona que en cualquier forma represente a dicho querellado en la fábrica, taller, establecimiento, finca o sitio en que se realizó el trabajo que dio origen a la reclamación o en su oficina o residencia. Si el querellado no pudiere ser emplazado en la forma antes dispuesta se hará su citación de acuerdo con lo que dispongan las Reglas de Procedimiento Civil para esos casos.

El querellado deberá hacer una sola alegación responsiva en la cual deberá incluir todas sus defensas y objeciones, entendiéndose que renuncia a todas las defensas u objeciones que no incluya en dicha alegación responsiva.

En los casos que se tramiten con arreglo a esta ley se aplicarán las Reglas de Procedimiento Civil en todo aquello que no esté en conflicto con las disposiciones específicas de esta ley o con el carácter sumario del procedimiento establecido por la presente; Disponiéndose en relación con los medios de descubrimiento anteriores al juicio autorizados por las Reglas de Procedimiento Civil, que la parte querellada no podrá usarlos para obtener información que debe figurar en las constancias, nóminas, listas de jornales y demás records que los patronos vienen obligados a conservar en virtud de las disposiciones de la Ley de Salario Mínimo y los reglamentos promulgados al amparo de la misma, excepto cualquier declaración prestada o documento sometido por la parte querellante en cualquier acción judicial; y que ninguna de las partes podrá someter más de un interrogatorio o deposición ni podrá tomar una deposición a la otra parte después que le haya sometido un interrogatorio, ni someterle un interrogatorio después que le haya tomado una deposición, excepto que medien circunstancias excepcionales que a juicio del Tribunal justifiquen la concesión de otro interrogatorio u otra deposición. No se permitirá la toma de deposición a los testigos sin la autorización



del tribunal, previa determinación de la necesidad de utilizar dicho procedimiento.

La información obtenida por el Secretario de Trabajo o por sus agentes debidamente autorizados en el curso de las investigaciones practicadas en el ejercicio de las facultades concedidas en la Ley de Salario Mínimo y en la Ley Orgánica del Departamento de Trabajo, será de carácter privilegiado y confidencial y sólo podrá ser divulgada mediante la autorización del Secretario de Trabajo.

En ningún caso que se tramite al amparo de esta ley podrá contrademandarse o reconvenirse al obrero o empleado querellante por concepto alguno.

Artículo 2.—Esta ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.

.....  
*Presidente de la Cámara*

.....  
*Presidente del Senado*

### **Departamento de Estado**

CERTIFICO: que es copia fiel y exacta del original aprobado y firmado por el Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico el día 5 de febrero de 1979.....

3

*Laura L. de Perdomo*

**Secretaria Auxiliar de Estado  
de Puerto Rico**

2/8/80

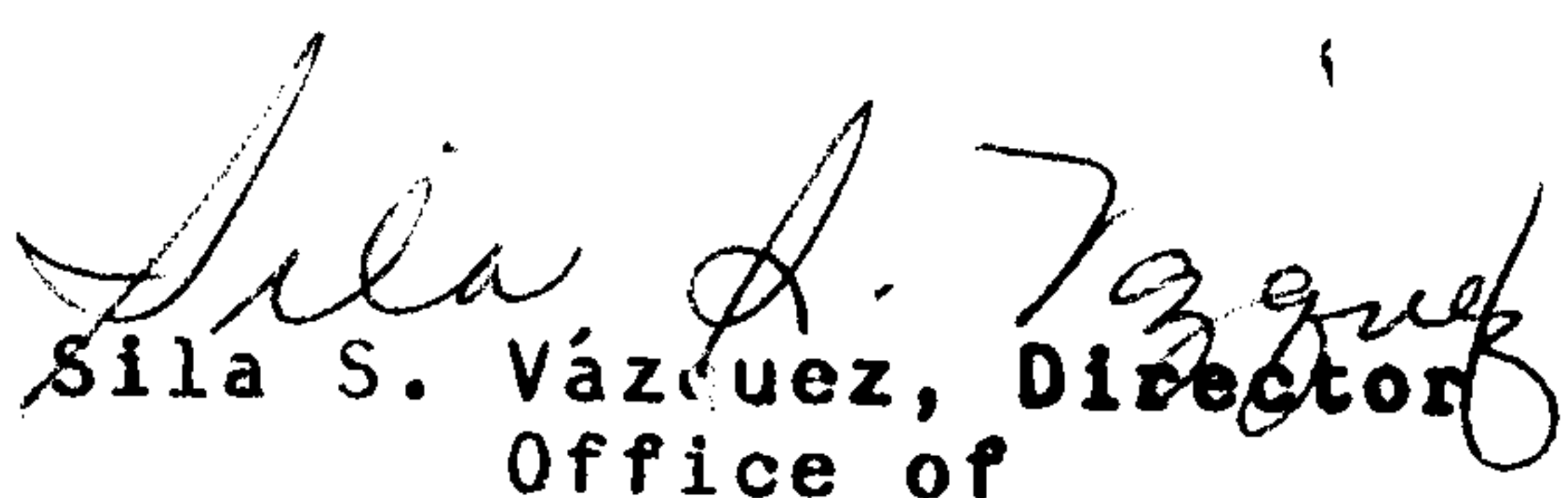
**COMMONWEALTH OF PUERTO RICO**  
**OFFICE OF LEGISLATIVE SERVICES**  
CAPITOL BUILDING  
P.O. BOX 3906  
SAN JUAN, PUERTO RICO 00904

February 7, 1980

Sila S. Vázquez, Director of the Office of Legislative Services of the Legislature of Puerto Rico, hereby certifies to the Secretary of State that she has duly compared the English and Spanish texts of Act No. 8 (H. B. 526) of the Third Session of the Eighth Legislature of the Commonwealth of Puerto Rico, entitled:

AN ACT to amend Section 3 of Act No. 2 of October 17, 1961, in relation to Summary Wage Claims, transferring to the Office of the Clerk of the Court the responsibility of summoning the defendants,

and finds the same are complete, true and correct versions of each other.

  
Sila S. Vázquez, Director  
Office of  
Legislative Services

(H. B. 526)

(No. 8)

(Approved February 5, 1979)

AN ACT

To amend Section 3 of Act No. 2 of October 17, 1961, in relation to Summary Wage Claims- transferring to the Office of the Clerk of the Court the responsibility of summoning the defendants.

STATEMENT OF MOTIVES

The Rules of Civil Procedure prescribe within their provisions a simple and adequate procedure for the prompt solution of controversies which originate in wage claims by employees against their employers. There are, nevertheless, some unnecessary limitations that could be eliminated, thereby providing greater flexibility and speed to this type of matter. Among these limitations is the fact that once the complaint is filed, the judge has to summon the defendant to answer said complaint. It greatly expedites the work of the Court when the clerks of the Court can issue the corresponding notice, without involving the judges in this routine procedure. The Administration of Justice in Puerto Rico will benefit in more than one way with this change, of which the main advantage would be to clear the judicial calendar, since the judges will have

more time to devote themselves to their adjudicative tasks exclusively.

BE IT ENACTED BY THE LEGISLATURE OF PUERTO RICO:

Section 1.- To amend Section 3 of Act No. 2 of October 17, 1961 to read as follows:

Section 3.- Court Order for the defendant to file an answer; notice; answer, application of Rules of Civil Procedure.

The Clerk of the Court shall serve notice on the defendant, with a copy of the complaint, warning him that he shall file his answer in writing, with proof of having served copy thereof on counsel for complainant, or on the latter if he has appeared in his own right, within ten (10) days after said service of notice, if made in the judicial district where the action is instituted, and within fifteen (15) days in all other cases, and also warning said defendant that should he fail to do so, judgement shall be entered against him, granting the remedy sought, without further summons or hearing. The judge may extend the term to answer only on motion of the defendant, which shall be served on counsel for complainant, or on the latter if he appears in his own right, setting forth under oath the reasons said defendant may

have therefor, if from the face of such motion the judge finds just cause. In no other case shall the Court have jurisdiction to grant such extension. The marshall or a private person shall serve the notice of the Clerk of the Court on the defendant.

Where defendant is not found, the order shall be served on the person who in any manner represents said defendant in the factory, shop, establishment, farm, or place where the work originating the claim was performed, or in his office or residence. Where notice can not be served on defendant as above provided, he shall then be summoned as prescribed by the Rules of Civil Procedure for these cases.

Defendant shall answer in one sole responsive plea in which he shall include all his defenses and objections, it being understood that he waives all defenses and objections not embodied in said plea.

In all cases prosecuted hereunder, the Rules of Civil Procedure shall govern insofar as they are not in conflict with the specific provisions of this Act or with the summary nature of the procedure hereby established; Provided, in relation



with the pre-trial means of disclosure authorized by the Rules of Civil Procedure, that the defendant may not use them to obtain information which must appear in the records, payrolls, wage lists and other records which the employers are bound to keep under the provisions of the Minimum Wage Act and the regulations promulgated thereunder, except any testimony given or document submitted by the complainant in any judicial action; and that neither party may submit more than one interrogatory or deposition, nor shall a party take a deposition from the other after having submitted an interrogatory thereto, nor submit an interrogatory to the other party after having taken a deposition therefrom, except under exceptional circumstances which, in the judgement of the Court, justify the granting of another interrogatory or another deposition. The taking of depositions from the witnesses shall not be permitted without authorization of the Court, after ascertaining the necessity of using said procedure.

The information obtained by the Secretary of Labor or his duly-authorized agents in the course of the investigations made in the exercise of the



powers granted in the Minimum Wage Act and in the Organic Act of the Department of Labor shall be of a privileged and confidential nature and may only be disclosed by authorization of the Secretary of Labor.

In no case prosecuted under this Act may the complainant workman or employee be countersued or countercharged for any cause.

Section 2.- This Act shall take effect immediately after its approval.